

ROUSSEAU, Stéphanie (2012) *Mujeres y ciudadanía: las paradojas del neopopulismo en el Perú de los noventa*. Lima: IEP. Pp. 82 -82

Definiendo el gobierno de Fujimori

«A estas alturas es adecuado discutir la magnitud en la que el régimen establecido por Fujimori en 1993 podría ser denominado democrático o autoritario, o una combinación peculiar de ambos. Tres fenómenos interrelacionados merecen atención. Primero, las numerosas violaciones al marco constitucional que Fujimori mismo había puesto en funcionamiento en 1993, constituyen una demostración irrefutable de sus tendencias autoritarias, aun cuando el régimen siguió siendo nominalmente democrático. Segundo, el comportamiento de los partidos políticos de oposición a lo largo de lo que quedaba de la década de 1990 -actores clave que podrían haber desafiado con mucha mayor fuerza la afirmación de Fujimori de haber reconfigurado la democracia peruana para que fuera "real"-, también parece altamente problemático. Por último, las encuestas de opinión pública mostraron que una mayoría de peruanos de todas las clases sociales respaldaban el golpe de Estado de Fujimori y el nuevo régimen que puso en funcionamiento, no porque prefiriesen el autoritarismo sino, más bien, sobre la base de una creencia de que esos cambios mejorarían el sistema democrático. Partiendo de una redefinición mínima de la democracia centrada en las condiciones para que haya elecciones libres y justas, y su realización, Cynthia McClintock (1999) y Gregory Schmidt (2000) han planteado serias dudas acerca de si el régimen de Fujimori podrían ser calificado como una democracia considerando la magnitud en la que el Poder Ejecutivo controlaba en realidad al Poder Judicial, los órganos electorales y una gran parte de los medios de comunicación. Fujimori utilizó también los recursos y las agencias del Estado en beneficio de sus campañas electorales, y recurrió a todo tipo de chantajes y amenazas en contra de sus oponentes. Más aún, mediante el empleo de leyes y tribunales "antiterroristas" especiales, el Estado estuvo en condiciones de arrestar y encarcelar a numerosos oponentes asociados con frecuencia con sindicatos u organizaciones comunitarias vinculadas o no a la Izquierda (Burt 2006). Según McClintock, la dificultad que han enfrentado los analistas –y opositores políticos– se relaciona con la falta de criterios cuantificables que permitan definir el límite para calificar las elecciones como libres y justas (McClintock 1999: 92). La mayoría de los problemas residía en el uso de los recursos estatales para campañas políticas y en la manipulación de la opinión pública por parte del gobierno a través del control de algunos de los principales medios de comunicación. Por otra parte, existen sólidos indicadores de la falta de independencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La magnitud del fraude así como de las irregularidades cometidas los días de las votaciones realizadas entre 1992 y el 2000, fue un problema en sí mismo que llevó a que no se considerase el contexto electoral como libre y justo. Pero la habilidad del gobierno de Fujimori para para emplear su popularidad a fin de distraer la atención de las críticas emanadas de los observadores electorales nacionales e internacionales –hasta las elecciones del 2000–, se vio facilitada por la falta de consenso en la oposición peruana y en los observadores internacionales sobre qué era

lo que debía considerarse un límite por debajo del cual las elecciones no podían ser consideradas libres, justas y transparentes. La elección de 1995 fue un ejemplo de esta confusión. El presidente ganó por una avalancha de votos a su principal oponente, Javier Pérez de Cuéllar, el ex Secretario General de las Naciones Unidas, quien había creado el partido Unión por el Perú junto con líderes de Izquierda Unida, ex dirigentes del Movimiento Libertad y otras personalidades de diversos sectores que se unieron en torno al tema de "recuperar las instituciones democráticas del Perú". Si bien durante la campaña electoral Fujimori recurrió a tácticas como la inauguración de obras públicas, la movilización de instituciones estatales –incluidas las autoridades militares y municipales– para hacer campaña a su favor, la utilización de medios de comunicación para lanzar campañas de desprestigio contra sus oponentes y otras cuestiones similares, su victoria electoral no levantó muchas sospechas, en la medida en que todos los observadores reconocían el alto nivel de popularidad del que gozaba Fujimori en ese momento. Se le atribuía la erradicación de gran parte de la amenaza insurgente gracias a la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pocos meses después del autogolpe, y la estabilización de la economía, aunque la mayoría de la población estaba muy lejos de haber encontrado, en la nueva economía neoliberal, una solución a sus problemas de supervivencia diaria. Los resultados de las elecciones, particularmente en el ámbito del Congreso, fueron cuestionados por la oposición y los observadores electorales, pero sin que fueran capaces de revertir el curso de los acontecimientos1 . Aparte de las cuestiones electorales, el gobierno de Fujimori violó varios principios democráticos, entre ellos, el respeto de las libertades cívicas y políticas, tales como la libertad de expresión y el derecho al debido proceso. Las leyes antiterroristas adoptadas bajo el gobierno de Fujimori ampliaron el ámbito de competencia de los tribunales militares y, como parte de su estrategia contrainsurgente, introdujo delitos vagamente definidos, lo que llevó a la detención de miles de sospechosos de terrorismo, quedando más tarde demostrado que muchos de ellos eran inocentes (Burt 2004: 262.263, Burt 2006). Por su parte, el Grupo Colina, una organización paramilitar, llevó a cabo varias ejecuciones extrajudiciales como en los casos de la Universidad "La Cantuta" y Barrios Altos. Durante el gobierno de Fujimori no se llevaron a cabo investigaciones sobre estos actos.»

ROUSSEAU, Stéphanie (2012) *Mujeres y ciudadanía: las paradojas del neopopulismo en el Perú de los noventa*. Lima: IEP. Pp. 90-94

Sobre el apoyo hacia Fujimori

«Tres factores explican el apoyo relativamente duradero que los sectores populares le brindaron a Fujimori a lo largo de la década del 90. Estos pueden ser descritos como factores políticos, factores relacionados a la identidad y factores materiales, incluyendo estas últimas dimensiones económicas y de seguridad. (…) Fujimori propició una nueva fase de ruptura con la élite política asociada con el régimen democrático de la década de 1980. Aun cuando los procesos fundamentales que han caracterizado la debilidad de la democracia se mantuvieron, e incluso empeoraron –gobierno personalista, clientelismo, ausencia de frenos y contrapesos institucionales, centralización del poder en manos del presidente–, la "independencia" política de Fujimori y su habilidad para reconstruir un nuevo orden político, fueron bien recibidos por los sectores populares que lo veían como una alternativa al estado de desesperación en el habían estado inmersos por un tiempo. El componente de identidad presente en el apoyo de los sectores populares estuvo relacionado con el alto grado de identificación personal que una

mayoría desarrolló frente a Fujimori. Como se ha mencionado anteriormente, los sectores populares compartían con Fujimori su experiencia de discriminación vinculada a su condición de hijo de inmigrantes japoneses, y sus antecedentes de clase popular. Fujimori también utilizó referencias de la cultura popular en su lenguaje y en las imágenes de marketing que fue creando a través de la utilización de ropa indígena en las diferentes regiones del Perú que visitaba y, por otro lado, bailando en escenarios con bailarines de tecnocumbia (Degregori 2001). También se hizo famoso por visitar los pueblos más remotos para inaugurar obras públicas, escuelas o puestos de salud. Ese contacto tan amplio del presidente con los sectores populares no se había visto en anteriores políticos peruanos. Al mismo tiempo, Fujimori jugó también con su origen asiático, el mismo que estaba asociado con el éxito en los negocios y en las redes internacionales. Su llamado neopopulista para los sectores populares se anclaba en una peculiar mezcla de referencias culturales que hacían eco en muchos peruanos y que los llevó a desarrollar un lazo particularmente fuerte con el presidente. Los componentes políticos y de identidad del apoyo de los sectores populares a Fujimori durante la mayor parte de la década de 1990, probablemente no se hubieran mantenido por mucho tiempo sin los beneficios materiales que recibieron las clases populares durante su gobierno. A pesar de la difícil situación económica en la que la mayoría de la población se mantuvo durante el gobierno de Fujimori, es importante tener en cuenta el hecho de que su mandato se inició durante una crisis sin precedentes. De hecho, fueron tres los principales logros, en particular, que los peruanos reconocieron como mejoras claves en su vida socioeconómica. En primer lugar, en términos de seguridad, el gobierno logró avances impresionantes contra los grupos insurgentes, como la detención de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, pocos meses después del autogolpe de abril de 1992. Si bien la violencia política siguió acosando a los peruanos a lo largo de la década, como lo demostró por ejemplo la crisis de los rehenes instigada por el MRTA en la Embajada del Japón en 1997, el número de ataques insurgentes 1 Fujimori ganó con el 64,4% de los votos en la primera vuelta. Sin embargo, el 40,8% de los votos para las elecciones legislativas fueron declarados nulos. Este y otros problemas relacionados con el conteo de votos generaron gran confusión y falta de confianza en el proceso electoral. Véase, entre otros, Schmidt 1999. en las principales ciudades del Perú y en la mayoría de regiones se redujo drásticamente a partir de 1994, y Fujimori demandó y recibió un reconocimiento personal por esta victoria. Otros dos logros materiales relacionados con la seguridad fueron, en primer lugar, la mejora de la situación macroeconómica en general, con una inflación estabilizada y el reinicio del crecimiento económico a principios de 1990 y, en segundo lugar, las políticas sociales destinadas a beneficiar a los pobres, las mismas que fueron aplicadas sobre todo después de 1993. Después de respaldarse en los programas de apoyo a la emergencia que buscaron mitigar algunos de los impactos negativos de la adaptación inicial al shock que tuvieron que enfrentar los sectores de bajos ingresos, el gobierno de Fujimori desarrolló una amplia gama de programas de compensación social con el apoyo de fondos de la cooperación internacional. La centralización de la mayoría de programas sociales bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, controlado por Fujimori, facilitó el vínculo directo entre el presidente y las personas beneficiarias. La política social estuvo orientada por un enfoque de “reducción de la pobreza” en correspondencia con el marco dominante de los organismos de crédito multilaterales a partir de los años 1990. Consistió en la entrega de beneficios a corto plazo a través de los cuales los receptores de ayuda seguían dependiendo de la asistencia estatal. La política del Estado no promovió el empleo sostenible, ni proporcionó recursos productivos o de formación técnica. En cambio, los programas sociales clientelistas concordaban con la necesidad de Fujimori de ejercer el control político directo sobre los sectores populares marginados, y de hecho una serie de trabajos han demostrado que el gasto social aumentó de manera significativa en los meses

previos a las campañas electorales (Gonzáles de Olarte 1998, Cotler y Grompone 2000). De esta manera, la política social no solo focalizó a los pobres de una manera paternalista, sino que también se crearon relaciones clientelistas institucionalizadas entre los sectores populares y el Estado. En un contexto en el que las organizaciones de los sectores populares ya estaban debilitadas y fragmentadas debido a los años de violencia insurgente y contrainsurgente en las barriadas y zonas rurales, el ingreso masivo de las agencias estatales al ámbito de las necesidades básicas debilitó aún más su capacidad de autonomía. El presidente se benefició directamente de las nuevas redes clientelistas dada la concentración de recursos en el Ministerio de la Presidencia, que controlaba la mayoría de tales programas, al menos hasta 1996, cuando se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH). (…) El PROMUDEH prosiguió con la estrategia del gobierno de focalizar a los sectores populares con la entrega de bienes que eran esenciales para la supervivencia cotidiana de la población, ya que no tenían otra alternativa. Esta descripción del apoyo brindado por las clases populares al gobierno de Fujimori corrobora la afirmación de que este último representaba un nuevo tipo de régimen populista que continuaba con las tendencias de representación política y de gobernanza que caracterizaron a la política latinoamericana al menos durante la segunda mitad del siglo XX. Fujimori exhibió varios de los rasgos asociados con los gobiernos populistas del pasado, tales como el liderazgo personalista, la movilización de un apoyo de masas heterogéneas concentrado en las clases populares, y débiles canales intermediarios de representación entre el líder y sus seguidores.»